

Santiago, once de febrero de dos mil veinticinco.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que el abogado don Juan Pablo Avello Gómez, en representación del demandante don Raúl Alejandro Sepúlveda Espinoza, en procedimiento sobre indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, causa Rit O-237-2024, del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, interpuso recurso de queja en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Talca, señor Gerardo Bernalles Rojas, señora (s) Carla Valladares Perroni y del abogado integrante señor Rodrigo de la Vega Parra, porque, a su juicio, dictaron con falta o abuso grave la sentencia de veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, que confirmó la de primer grado que declaró la prescripción de su acción respecto de uno de los demandados que la alegó.

Señala que la demanda la interpuso el 7 de mayo de 2024, cuarenta y un días corridos antes del cumplimiento del plazo de cinco años que establece el artículo 79 de la Ley N° 17.344, que se cuenta desde la ocurrencia del accidente que fue el 17 de junio de 2019, logrando notificar a seis demandadas el 14 de mayo del mismo año, luego notificó a la séptima demandada por avisos el 1 de julio y, por último, al demandado Juan Edgardo Ávila Fariña, luego de diversos intentos de notificación en distintos domicilios que se proporcionaron, pudo notificarlo mediante exhorto, a través de receptor particular en la comuna de Linares, el 10 de agosto de 2024, sin embargo, el tribunal de primer grado estimó que la demanda fue notificada en forma extemporánea respecto de este demandado y acogió la excepción de prescripción que opuso, resolución que fue confirmada por los ministros recurridos.

Refiere que aquellos incurrieron en falta o abuso grave en su dictación, pues infringieron el texto expreso del artículo 2523 N° 2 del Código Civil que alude al “requerimiento”, hecho que involucra una acción en movimiento, esto es, la petición formulada al momento de interponer la demanda, sin perjuicio que de los artículos 2518 y 2053 N° 1 del mismo cuerpo legal no se desprende que deba notificarse antes que se cumpla el plazo de prescripción para que sea interrumpida, además que el acto de notificación no se encuentra dentro de las facultades o atribuciones de la parte, sino que del tribunal, o en subsidio, del órgano a quien se delega la función.

Agrega que con lo resuelto se afectó su derecho a acudir a los tribunales para el pronunciamiento acerca de su pretensión, dejando de aplicar el principio protector y afectando el debido proceso, debiendo haberse considerado que, en la especie, la demanda judicial interrumpe civilmente la prescripción, si se repara en el distingo entre el efecto procesal y el sustantivo de la demanda, del que no



parece adecuado exigir para la interrupción la notificación de la demanda, la que si bien debe dotarse de consecuencia en el ámbito estricto del derecho procesal de configurar el inicio del procedimiento, no cabría estimarlo en el elemento constitutivo de la interrupción civil, lo que se refuerza si se considera que la notificación no constituye un acto dentro de la esfera únicamente del demandante, que es precisamente lo que ocurrió, pues su realización queda supeditada a los vaivenes del acto procesal del receptor o de la entidad encargada de practicarla.

Solicita, en definitiva, acoger el recurso y declarar que la resolución dictada lo ha sido incurriendo en falta o abuso grave, procediendo a la dictación de una nueva que acoja el recurso de apelación deducido por su parte, anulando la sentencia que declaró prescrita la acción pretendida respecto de uno de los demandados, y en su lugar, se la rechace, ordenando continuar con el procedimiento.

**Segundo:** Que, al evacuar el informe de rigor, los recurridos señalaron que conocieron en cuenta el recurso de apelación deducido contra la resolución que acogió la excepción de prescripción de la acción deducida respecto del demandado que la alegó, la que fue confirmada haciendo suyos los fundamentos del tribunal *a quo*, al estimar acertado el razonamiento, por concurrir los presupuestos para acogerla, pues transcurrió con creces el plazo de cinco años entre la fecha de ocurrencia del accidente y la notificación de la demanda.

**Tercero:** Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, nominado “De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales”, y su acápite primero, que lleva el nombre de “Las facultades disciplinarias”, contiene el artículo 545 que lo consagra como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias definitivas e interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

**Cuarto:** Que, en el presente caso, el mérito de los antecedentes no permite concluir que la magistratura recurrida -al decidir como lo hizo- haya incurrido en alguna de las conductas que la ley reprueba y que sea necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte. En efecto, como puede advertirse, para confirmar la resolución apelada analizaron su tenor y la preceptiva pertinente, concluyendo que efectivamente el plazo de prescripción de la acción de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo había transcurrido, pues la demandada principal fue válidamente emplazada con posterioridad, estimando que la judicatura *a quo* resolvió de manera correcta la excepción deducida por la demandada principal, previo estudio de los



antecedentes y de la normativa aplicable; proceso racional que, obviamente, implica analizar e interpretar las disposiciones que rigen el caso concreto, lo que importa precisamente el ejercicio de las facultades privativas propias de la función judicial.

**Quinto:** Que, al respecto cabe señalar que, como ha dicho reiteradamente este tribunal, el proceso de interpretación de la ley que lleva a cabo la judicatura en cumplimiento de su cometido no puede ser revisado por la vía del recurso de queja, porque constituye una labor fundamental, propia y privativa de aquellos, salvo que se constate una violación evidente y manifiesta en dicha actividad, que por su entidad y arbitrariedad, configure una falta o abuso que deba ser enmendada, cuestión que, en la especie, no concurre, por cuanto dicha magistratura se limitó a argumentar en torno al conflicto sometido a su consideración, arribando a conclusiones jurídicas que, en lo esencial, se enmarcan dentro de criterios de racionalidad propios del ejercicio de la jurisdicción, por lo que el presente arbitrio, constituye, en definitiva, una mera expresión de la disconformidad del recurrente, que como se ha dicho, no es controlable por esta vía.

**Sexto:** Que, en ese contexto, y atendida la jurisprudencia de esta Corte referida al recurso de queja, se debe concluir que la magistratura recurrida no incurrió en falta o abuso grave susceptible de ser enmendada por la vía disciplinaria, por lo que el presente recurso debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se **rechaza** el recurso de queja deducido en contra de los integrantes de la Corte de Apelaciones de Talca, ministro señor Gerardo Bernalles Rojas, ministra señora (s) Carla Valladares Perroni y del abogado integrante señor Rodrigo de la Vega Parra.

Regístrese y archívese.

N°61.688-2024.-





Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Gloria Chevesich R., Andrea Maria Muñoz S., Mireya Eugenia Lopez M., Ministro Suplente Juan Manuel Muñoz P. y Abogada Integrante Fabiola Esther Lathrop G. Santiago, once de febrero de dos mil veinticinco.

En Santiago, a once de febrero de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

